DOS MINUTOS DE DOCTRINA

25 de agosto de 2015

SEÑORES DEL JURADO...

Un acusado de homicidio pidió ser sometido a juicio por jurados en la Provincia de Buenos Aires, donde una ley reciente lo permite. El juez se enojó.

Una ley de la Provincia de Buenos Aires implementó a nivel local el juicio por jurados. Desde la Constitución Nacional de 1853, el tema permanece abierto, puesto que su artículo 24 dice que “el Congreso promoverá [...] el establecimiento del juicio por jurados” y aun no se han dictado normas federales al respecto. La Provincia de Buenos Aires ha sido una de las pocas que lo ha hecho.

Un hombre procesado por homicidio simple y dos tentativas de homicidio no tuvo mejor idea que pedir al juez ser sometido a juicio por jurados. El juez, claramente enojado, se opuso férreamente, en una sentencia que llama la atención por su vehemencia¹.

A tanto llegó su oposición, que en lugar de limitarse a negar el pedido, declaró inconstitucional la ley que crea ese sistema.

Sostuvo que quienes creen que al dictarse una ley que permite el juicio por jurados, “se salda una deuda con la Constitución” se equivocan de medio a medio: *para estar en deuda con la Constitución habría que incumplirla*, lo que no ha ocurrido, pues la

Constitución no estableció el juicio por jurados ni ordenó implementarlo, sino que dejó librada la decisión a los legisladores futuros.

Quienes redactaron la Constitución, dijo el juez, habrán pensado que en el S. XIX el juicio por jurados era una opción válida. “Pero hoy en día es anacrónica, retrógrada y oscurantista”. Casi nada...

Para el magistrado, la ley provincial violaba nada menos que seis principios constitucionales al establecer el juicio por jurados: el sistema representativo, republicano y federal adoptado por la Argentina, el requisito de la idoneidad, los pactos internacionales de derechos humanos y la igualdad ante la ley, al otorgarle derechos extraordinarios al acusado en desmedro de las víctimas de sus delitos. Todos los argumentos del juez fueron expuestos con inusitada energía. Citaremos sólo algunos.

El juez dijo que como las provincias son anteriores a la Nación, las facultades no delegadas a esta última son exclusivas de las provincias. Por lo tanto, la Constitución Nacional no les puede imponer el juicio por jurados. Las provincias programaron este tipo de juicios para la Nación, pero no lo

¹ TCrim 2, Azul (BA), 2015; LL 16 de abril de 2015; AR/JUR/6574/2015

adoptaron para ellas mismas. La constitución de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no dice nada sobre jurados; pero sí menciona que el Poder Judicial será desempeñado por jueces. *Y los jurados no son jueces.*

Como el procedimiento para designar los jueces está reglado, permite seleccionar entre los postulantes a magistrados que cuenten “con solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos”. Entonces, consideró *inaudito* que la ley que creó en la provincia los juicios por jurados, desatendiendo los requisitos establecidos por la constitución provincial, pretenda establecer un sistema en que el juzgamiento queda en manos *de jurados iletrados, sin práctica alguna en cuestiones jurídicas, sin que necesiten tener determinada cantidad de años de ciudadanía en ejercicio, ni siquiera que deban contara con al menos 25 años de edad y sin que cuenten con solvencia moral, idoneidad y respeto por las instituciones*”.

Agregó que “el juicio por jurados es un sistema vulnerador del sistema republicano de gobierno, que reclama que todas las decisiones del Estado cuenten con la debida fundamentación”. El juicio por jurados, en cambio, establece *el veredicto no fundado*, y un estado que no fundamenta los actos de gobierno “*es un Estado arbitrario, despótico y dictatorial*”. ¡Cáspita!

Dijo también que “así como durante la Inquisición el acusado no sabía de qué se lo acusaba, el condenado por un jurado *no sabe por qué se lo condena. La actuación de un grupo de personas que deciden en forma anónima, no fundada y en deliberación secreta, viola todos los principios de la responsabilidad republicana de los funcionarios*”.

En su opinión, “un Estado que permite que un acusado quede privado de su libertad (incluso de por vida) o la presunta víctima (o sus familiares) privada de justicia, sin explicar a nadie por qué se condena o absuelve, sin dar ningún fundamento de la decisión, *no tiene nada de republicano*”. Agregó que “una sentencia infundada no puede ser explicada a las partes y a la sociedad, no puede ser revisada por un órgano judicial superior, no puede ser revertida en caso de ser ilógica o injusta, no permite testear si ha sido dictada por el jurado con responsabilidad o con ligereza y, por ende, constituye un acto arbitrario violatorio de la Constitución.” ¡Caracoles!

Para el juez, “si el Congreso sancionara leyes con voto secreto y sin fundamentación, regiría un Estado dictatorial. Dictar un veredicto con voto secreto y sin fundamentación también es dictatorial y no puede transformarse en la quintaesencia del republicanismo.”

Como la ley provincial exige a los jurados que decidan según su “*íntima convicción*”, el juez arremetió contra este concepto: “la *íntima convicción* es antirrepublicana. Los veredictos formados en la *íntima convicción* son arbitrarios, y, por ende antirrepublicanos. La sentencia razonada es la concreta línea que separa a la justicia civilizada *de la barbarie punitiva*” ¡Troncho!

“El derecho penal deja de ser derecho, para transformarse en *pura barbarie* cuando el juzgador, en vez de fallar dando cuenta de sus razones, simplemente emite su juicio “*porque sí*”, en base a la *huérfana* libre convicción, [...] una mera creencia subjetiva sobre determinada cosa,. Puede tratarse de una creencia absurda o irrazonable... una conclusión que no necesariamente tiene origen en la razón

humana, que puede ser hija de la irracionalidad, el sentimentalismo, los prejuicios, de la abulia de pensamiento... La transparencia de la justicia sólo se puede garantizar cuando el juez llega a la solución del caso sobre la base de razonamientos lógicos, entrelazados entre sí de modo que permitan desentrañar la verdad y justicia de los hechos, que son el único basamento sobre el cual puede erigirse el edificio de la justicia.”

“El jurado popular no suministra ningún veredicto razonado. [Puede] dictar un veredicto sin efectuar razonamiento alguno. Estos *juzgadores amateurs* [pueden tener] la peligrosa creencia de que se hace un llamado a su conciencia, en lugar de a su pensamiento lógico y razonado.”

Más: “*no hay peor oscurantismo que suprimir en los actos humanos aquella única cualidad que separa a los hombres de las bestias: la razón*”. ¡Córcholis!

También dijo el juez que los veredictos inmotivados promueven la violación de los derechos humanos, por lo que “después de tantos esfuerzos por parte de los gobiernos democráticos para formar fuerzas de seguridad respetuosas de los derechos individuales, con los jurados volvemos a transformar el proceso penal en tierra fértil para que vuelva a germinar la policía de hace treinta y pico de años---“

Atacó el magistrado a quienes dicen que los jurados “democratizan” la justicia: “es

el argumento más falaz de todos: el jurado no es democrático; no es tolerado por ningún estado verdaderamente democrático”. Esto es así, en su opinión, “porque el jurado no es elegido por el pueblo ni tampoco es el pueblo en sí mismo. A los miembros del jurado no los elige nadie: surgen de un sorteo realizado entre los integrantes del padrón electoral”.

El juez se preguntó qué ocurriría si al presidente se lo eligiera por sorteo: no representaría a nadie. “Si el sorteo fuera perverso, inmoral, incapaz, mentecato, ¿a quién representaría?” Al argumento de que los jurados “son el pueblo”, dijo que se trata de un sofisma burdo y descarado. “Si al Presidente se lo designara por sorteo, ¿habría que aceptar que la persona sorteada es el pueblo? Y si fuera perverso, inmoral, incapaz o mentecato, ¿habría que aceptar que el pueblo es perverso, inmoral, incapaz o mentecato? [...] Si el jurado representa al pueblo, bastaría un escrutinio de doce personas para elegir al presidente de la Nación”.

Como se puede advertir, el juez no escatimó adjetivos. Las diez páginas de su sentencia son un alegato feroz contra el juicio por jurados, “una suerte de tiranía del azar”. Su declaración de inconstitucionalidad fue apelada por el defensor del presunto homicida.

¿Qué resolvió la Cámara de Apelaciones? La respuesta, en el próximo número...

* * *

Esta nota ha sido preparada por Juan Javier Negri. Para más información sobre este tema pueden comunicarse con el teléfono (54-11) 5556-8000 o por correo electrónico a np@negri.com.ar.

**Este artículo es un servicio de Negri & Pueyrredon Abogados a sus clientes y amigos.
No tiene por objeto prestar asesoramiento legal sobre tema alguno.**